

## **GÉNERO Y ELECCIONES**

### **EXPERIENCIA SINALOA 2016**

#### **I. Introducción**

Después de la promulgación de la Constitución de 1824 mujeres y hombres sobre todo periodistas e intelectuales reflexionaban que nuestra nueva carta magna no otorgaba derechos de ciudadanía a las mujeres en México. El primer suceso de que se tiene conocimiento sobre movimientos de mujeres en pro de alcanzar sus derechos político-electorales fue en el mismo 1824 en Zacatecas donde un grupo de escritoras de la revista “El Abanico” pidieron votar y ser votadas.<sup>1</sup>

Durante los siguientes años los espacios de reflexión en la prensa, con su libertad de escribir y la oportunidad que surgía de poder reunirse y discutir sobre asuntos de interés común en los organismos de la sociedad civil se convirtieron en las prácticas republicanas de donde surgió una masa crítica que reclamaba libertad e igualdad de derechos para todas las personas.<sup>2</sup> A pesar de todo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se promulgó de nuevo sin el derecho al sufragio de las mujeres.

El análisis de la situación de las mujeres en el ámbito de la participación política concurre con el desarrollo de la teoría de género, un corpus de conocimiento fundamental a través del cual es posible distinguir y explicar los mecanismos socio-culturales a través de

---

<sup>1</sup> Consultado en la revista virtual “Perfiles.org. Periodismo alternativo, información y opinión” <http://revistaperfiles.org/index.php/editorial/opinion/471-mujeres-candidatas>. el 08/Sep/ 2015.

<sup>2</sup> (Zuñiga, 2002)

los cuales las diferencias entre mujeres y hombres se han traducido en múltiples dimensiones de desigualdad de género.

La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus dispositivos y estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.

En su concepto de género, Scott (1986) enfatiza las dimensiones socio-política y socio-histórica. La primera de ellas, hace referencia a que el género devela la desventaja que enfrentan las mujeres para acceder al poder y las reposiciona con posibilidades en las que no se expresan los implícitos que han dado, o sugerido, superioridad para los hombres. La segunda dimensión, socio – histórica, permite ver el potencial de las mujeres para contribuir a remodelar sistemas y estilos sociales de convivencia y desarrollo.<sup>3</sup>

El derecho al sufragio, como derecho fundamental en materia electoral otorga a la ciudadanía, la potestad de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. Esta igualdad constituye un ideal en virtud de que las mujeres se encuentran en situación de desventaja histórica en el acceso a candidaturas y en la posibilidad de contender por un espacio de representación popular. Con el objeto de favorecer la eliminación de obstáculos que impidan a las mujeres el pleno ejercicio a sus derechos de participación política, las legislaciones electorales han previsto normas sobre equidad y género, en calidad de directrices a satisfacer y obligaciones a respetar, fundamentalmente por los partidos políticos.

Durante los últimos años la discusión académica sobre las acciones afirmativas para la participación de la mujer en los distintos cargos de elección popular en nuestro país, concentrándose en un primer momento en la llamada cuota de género, con el fin de reducir

---

<sup>3</sup> Según Joan Scott (2003) el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder; es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; de tal forma que las identidades masculinas y femeninas se encuentran determinadas por los procesos diferenciados de socialización, por lo que no son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación que se proyectan y activan a través de las diversas estructuras regulatorias de la sociedad (Scott, 2003).

la brecha de desigualdad en representación política entre mujeres y hombres. Así pues para avanzar en este tema, a partir del reconocimiento de que una democracia efectiva requiere para incorporar la representación de la ciudadanía en su totalidad, se ha determinado por especialistas, que el punto de partida entre mujeres y hombres ha sido asimétrico y, que en consecuencia, la aplicación de reglas neutrales solo conducía a resultados desiguales.

En la actualidad, ningún país ha podido alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada, la desigualdad entre mujeres y hombres continua de forma persistente.

La desigualdad social, ha sido una preocupación de la mayoría de los gobiernos y sociedades en el mundo desde hace ya un buen tiempo. Específicamente a partir del siglo XVIII, los fundamentos de la modernidad hicieron el principio de igualdad uno de sus puntos centrales, vinculándola a la libertad, los derechos humanos y la democracia.

Tras un largo caminar y que aún se sigue avanzando en esta aspiración, el siglo XXI se ha denominado “el siglo de las mujeres” trayendo consigo los resultados de las grandes luchas y revoluciones por la inclusión y la participación de las mujeres en la vida pública y la política.

De esta forma, la participación política de las mujeres es prioridad fundamental para el desarrollo de la sociedad, ciudadanía y en específico para fortalecer la democracia en el Estado Mexicano, garantizando así los derechos humanos.

El presidente Enrique Peña Nieto, en 2013 promovió una Reforma Político-Electoral, que incluía, “el obligar a los partidos a otorgar a las mujeres el 50 por ciento de sus candidaturas a legislaciones federales y locales”. La aprobación de esta iniciativa implicó la modificación al Artículo 41 Constitucional, así como modificaciones y adiciones a las leyes electorales en mayo de 2014.

Durante 2015 y 2016 se efectuaron elecciones federales en todo el país y locales, concurrentes y no con la federal, en la mayoría de las entidades federativas. Estas elecciones pusieron a prueba un nuevo marco normativo, resultante de la reforma electoral de 2014, y derivan en una redefinición del mapa político-electoral nacional, al mostrar las nuevas

condiciones prevalecientes para la competencia electoral, entre las que se incluye el fenómeno de las llamadas candidaturas independientes.

Por su parte, en el Estado de Sinaloa el 6 de mayo del año 2015, el congreso local aprobó la reforma constitucional y legal que consagra la paridad horizontal y vertical para las candidaturas a los puestos de elección popular en Sinaloa.

Por tanto, es posible afirmar que hay una necesidad imperante sobre la paridad en las candidaturas de pasar de una igualdad sustantiva formal (Igualdad expresada en la ley) a una igualdad real proyectada en resultados. Dado que el derecho de las mujeres a participar y acceder a puestos en la toma de decisiones implica proteger derechos humanos de las mismas, la reforma fue a nivel constitucional respetando estándares internacionales a los que México está suscrito.

Y en esa misma idea, México manifiesta su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y con la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En ese sentido, el histórico resultado electoral en el Estado de Sinaloa, para las mujeres que el pasado 5 de junio consiguió cinco alcaldías y 18 diputaciones locales, disminuye la brecha de desigualdad en cuestión de género y representa la oportunidad anhelada para demostrar que sabemos hacer política.

Así pues los espacios ganados por las mujeres en esta elección son más que históricamente habíamos luchado por tener, por lo tanto hemos de reconocer en ello una oportunidad inigualable para comprobar que como mujeres somos capaces de dirigir, de liderar y de tomar decisiones en puestos de elección popular, siempre teniendo un trabajo encaminado a mejorar las condiciones de la sociedad en general y de los derechos humanos de las mujeres y los grupos vulnerables.

## **II. La Paridad como acción afirmativa**

Existen importantes desigualdades de género en las diferentes esferas de la sociedad, incluyendo el ámbito de la política y en particular el proceso electoral. A pesar de que en muchos países la igualdad de derechos de hombres y mujeres está reconocida jurídicamente,

a menudo las condiciones sociales no permiten el establecimiento de una igualdad de facto, y las mujeres, ya sea como candidatas, votantes o miembros de la sociedad civil, se enfrentan a múltiples obstáculos que dificultan el disfrute efectivo de sus derechos en las diferentes etapas del proceso electoral.

En términos de representación política, a pesar de que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población mundial, su débil presencia en los Parlamentos nacionales, con apenas un 21,4%<sup>1</sup> a nivel mundial, es un fiel reflejo de las discriminaciones de las que éstas son objeto a la hora ocupar cargos públicos y puestos de responsabilidad en la esfera política, que continúa siendo un ámbito muy masculinizado. Las mujeres candidatas se enfrentan a numerosas barreras para ser elegidas, que incluyen, entre otras, discriminaciones en el marco jurídico para el mantenimiento de elecciones.<sup>4</sup>

En ese sentido, es preciso decir que la paridad es más que una acción afirmativa, no es una cuota mayor a favor de las mujeres, no es una medida temporal para cerrar paulatinamente la brecha entre hombres y mujeres. Esta debe de venir a ser una medida definitiva para lograr la igualdad sustantiva, la igualdad real, de hecho y de derecho. Así pues, la paridad corresponde, que hombres y mujeres representen en su diferenciación sexual y no en su identidad genérica, dignamente los intereses de una nación, pues la paridad, reconoce la dualidad sexual del género humano para trascender la representación de grupo, ampliando en forma inclusiva a otros grupos sociales discriminados (Peña, 2015).

Hay una necesidad imperante respecto a los dos enfoques propuestos para el análisis de la paridad en las candidaturas y es el de pasar de una igualdad sustantiva formal (Igualdad expresada en la ley) a una igualdad real proyectada en resultados. Dado que el derecho de las mujeres a participar y acceder a puestos en la toma de decisiones implica proteger derechos humanos de las mismas, la reforma fue a nivel constitucional respetando estándares.

---

<sup>4</sup> Para más información ver: [www.ipu.org](http://www.ipu.org) estructuras de poder patriarcales en el seno de los partidos políticos, limitaciones a la financiación de campaña electoral y un trato desigual por parte de los medios de comunicación, así como percepciones sociales que conciben la política como un mundo reservado a los hombres.

En referencia a la sentencia SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS emitida por la Sala Superior del (TEPJF) la causa de pedir era que, bajo el pretexto de que los candidatos se habían seleccionado por un procedimiento democrático establecido en los estatutos de los partidos políticos se permitía no cumplir la cuota (Así lo señalaba el COFIPE anterior ley federal electoral, lo cual era totalmente inconstitucional). El órgano electoral, en ese entonces Instituto Federal Electoral, interpretó esta practica como procedimiento democrático, método mediante el cual se eligieron a los candidatos de manera directa, restringiendo claramente el derecho a las mujeres a ser votadas. El tribunal se pronunció sobre la base de que la esencia de la cuota de género es alcanzar la igualdad real en el ámbito político electoral para mujeres y hombres. A la luz del principio pro-persona plasmado en el artículo 1ro. Párrafo segundo de nuestra carta magna, mismo que establece que tratándose de preceptos de derechos humanos la interpretación debe favorecer en todo tiempo, a las personas, la protección más amplia. El tribunal determinó que por procedimiento democrático se debía entender cualquiera de los procedimientos existentes aprobado y plasmado en los estatutos.

Dentro de la mencionada sentencia el Tribunal hace un análisis de las cuotas de género de 50-50 como acción afirmativa, como derecho plasmado que no solo garantice el acceso de las mujeres puestos de elección popular de manera igualitaria, siendo indispensable para ello el establecimiento de estas acciones como mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva, habiendo tomado en cuenta el contexto histórico-social de las diferencias entre mujeres y hombres. Estableciéndose de manera temporal para favorecer la participación de las mujeres en lo político en éste caso.

El Tribunal consideró como caso específico de las acciones afirmativas en favor de las mujeres como es el caso de las cuotas electorales de género. Pues en este caso el primer fin que es de compensar o remediar la histórica discriminación da paso al de provocar una nivelación en grupos sub-representados. Y que la realización de una función social se cubre con la paridad se asegura que todos las persona que integran una sociedad tengas las mismas oportunidades en la búsqueda de alcanzar cargos en órganos de toma de

decisiones en el ámbito público, beneficiando así no a una sola persona sino a todo el grupo pues alcanzan una representación equitativa.

En otra parte, cabe destacar que, la necesidad de la existencia de políticas de igualdad ha sido demostrada ampliamente por la coincidencia de los diagnósticos que han puesto en evidencia que aún en los casos donde las políticas sociales y económicas tienen carácter universal y distributivo o redistributivo de los recursos que se asignan, las discriminaciones de género no desaparecen (García 2008). Las políticas de igualdad han representado un avance significativo frente a las anteriores tradiciones de políticas públicas que eran políticas “ciegas al género” o “neutrales al género (García, 2008)

### **III. Candidaturas en el Proceso Electoral Local 2016. Caso: Estado de Sinaloa**

De acuerdo con Rosa Cobo (2008), a la teoría feminista le es inherente el concepto de género, en tanta categoría de análisis central, para dar cuenta de las circunstancias que enfrentan las mujeres y los hombres en la sociedad. Asimismo, sostiene que dicha noción surge a partir de la idea de que lo «femenino» y lo «masculino» no son hechos naturales o biológicos, sino *construcciones culturales*. Para muestra de ello, y gracias a la recién aprobada Paridad en las candidaturas hubo un número mucho mayor de mujeres candidatas en las elecciones del domingo 5 de junio del presente año. Esto es una prueba clara de que hacen falta acciones afirmativas para establecer un “piso parejo” que garantice que la participación y representación de candidaturas sea igual entre mujeres y hombres.

La participación de la mujer en las elecciones 2016 cubrió la paridad de género horizontal y vertical, establecida en las reformas constitucionales recientes y que adoptó el Instituto Nacional Electoral (INE). Así pues tenemos hoy en nuestro Estado 13 diputadas y 5 presidentas municipales electas y que se muestran en el siguiente recuadro.

<b>PRESIDENTAS MUNICIPALES ELECTAS 2017-2018</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>PARTIDO POLÍTICO</b>

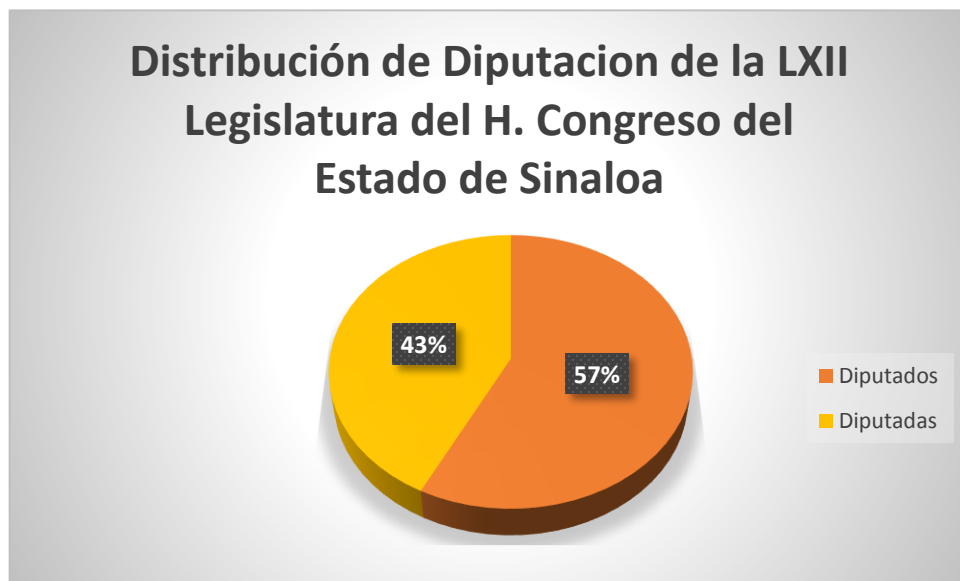
1. María Lorena Pérez Olivas	Badiraguato	PRI
2. Nubia Xitlali Ramos Carbajal	El Fuerte	PRI
3. Diana Armenta Armenta	Guasave	PRI
4. María Beatriz León Rubio	Sinaloa de Leyva	PRI
5. Carla Corrales Corrales	Cosalá	PAS

<b>DIPUTADAS ELECTAS 2016-2018</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>DISTRITO</b>	<b>PARTIDO POLÍTICO</b>	<b>FORMA ELECTA</b>
1. Gloria González Burboa	01	PRI	Mayoría relativa
2. María Fernanda Rivera Romo	02	PRI	Mayoría relativa
3. Ana Cecilia Moreno Romero	06	PRI	Mayoría relativa
4. Guadalupe Iribe Gascón	10	PRI	Mayoría relativa
5. Irma Guadalupe Moreno Ovalles	16	PRI	Mayoría relativa
6. Paola Iveth Gárate Valenzuela	17	PRI	Mayoría relativa
7. Maria Eugenia Medina Miyazaki	19	PRI	Mayoría relativa
8. Margarita Villaescusa Rojo	20	PRI	Mayoría relativa
9. Elsy López Montoya	21	PRI	Mayoría relativa
10. Irma Tirado Sandoval	22	PRI	
11. Maribel Chollet Morán	23	PRI	Mayoría relativa
12. Sylvia Treviño Salas	-----	PAN	Representación proporcional



13. Tania Margarita Morgan Navarrete	----	PAN	Representación proporcional
14. Alba Virgen Montes Álvarez	----	PAS	Representación proporcional
15. Soila Maribel Gaxiola Camacho	----	PAS	Representación proporcional
16. Angélica Díaz Quiñonez	----	PAS	Representación proporcional
17. Merary Villegas Sánchez	----	MORENA	Representación proporcional

Desde esta figura, vemos como las mujeres en nuestro Estado, ocupan hoy casi el 50% de las curules en la siguiente legislature, que da inicio el próximo 01 de octubre. Lo que significa que el camino no ha sido facil, sin embargo hay a muchas mujeres antecesoras que reconocer.



#### **IV. Conclusiones**

A esto hay que agregar el trabajo a favor del impulso y visibilidad de las voces de todas las mujeres, afuera y adentro de los partidos, u organizaciones civiles para construir una cultura democrática, participativa e incluyente. Hacen falta mujeres líderes en los partidos, pero también mujeres interesadas en la política afuera de ellos, que puedan no sólo ser candidatas independientes, sino líderes políticas capaces de impulsar propuestas y agendas, acompañando el proceso democrático que el país y nuestro Estado necesita.

Apostar por el empoderamiento político de las mujeres es un buen negocio para el Estado que proyectaría al País, y todas y todos ganamos. Hay que impulsar, por tanto, la participación de las mujeres como votantes, pues representan la mitad del padrón y su voz cuenta y es importante.

Sin embargo, se puede afirmar que falta todavía quéhacer para que se cumpla el principio de paridad en su totalidad y en los primeros lugares de las listas de representación proporcional. Pues en general, no nominan a mujeres en los primeros lugares de sus listas, y esto es evidente en los resultados que hemos obtenido en el Estado de Sinaloa en las elecciones pasadas.

Así pues, analizar la evolución de la cuota de género a la paridad de género en la integración de candidaturas, es evidente mostrando cada paso hacia el objetivo último y marcado por el esfuerzo máximo de las legisladoras, respaldadas por el movimiento feminista y amplio de mujeres. No obstante, al verse amenazados sus privilegios, inician cerrando filas una y otra vez, hasta conseguir frenar los avances que en materia de paridad se están consiguiendo.

No hay que dejar de lado que estamos hablando de la redistribución del poder, de una ecuación: mientras las mujeres ganan, los hombres necesariamente pierden algo, por que los espacios son los mismos y no aumentan para dar cabida a las nuevas mujeres “integrantes”.

Con ello todavía hay un trecho por recorrer, terminar de afinar las reglas y una gran tarea y responsabilidad, la de normalizar la presencia de las mujeres en todos los espacios de poder, y solo se logrará consolidando una nueva cultura política regida por los principios de igualdad y no discriminación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Extraído el 02 de septiembre de: [http://genero.ife.org.mx/normatividad\\_est.html](http://genero.ife.org.mx/normatividad_est.html)
- Extraído el 04 de septiembre de: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Documents/Genero%20y%20Elecciones.pdf>
- Valdés, Teresa, Claudia Dides, Heidi Fritz & Rocío Ferrada. Guía para la transversalización de género en el PNUD Chile. Chile: Flacso-Chile. 2006.
- Scott, Joan (2003). El género, una categoría útil para el análisis histórico. En Martha Lamas *El género: la construcción general de la diferencia sexual*. (pp. 265-302). México: PUEG.
- García, Genaro (2007). *Apuntes sobre la condición de la Mujer*. México: Porrúa-UAZ.
- Peña, Blanca (2015). Paridad Constitucional, Marco Regulatorio y Jurisprudencia en México. Documento inédito.
- Revista virtual “Perfiles.org. Periodismo alternativo, información y opinión” <http://revistaperfiles.org/index.php/editorial/opinion/471-mujeres-candidatas>. el 08/Sep/